

voluntad social predominante, que puede ser monocolor (el catolicismo, p. e.), plural (el cristianismo), muy plural (la religión como concepto general al menos), pero que nunca dejará de existir de algún modo, porque un pueblo absolutamente indiferente a todo criterio ético o moral es una entelequia inexistente» (pág. 57).

Finalmente, Alberto de la Hera se ocupa de las confesiones religiosas no católicas en el Derecho español, ofreciendo una panorámica del tema desde 1812 hasta nuestros días. Se trata de un trabajo, al mismo tiempo de interpretación y de síntesis, en el que la nitidez de la exposición nunca va en detrimento del rigor. La doble vertiente del autor

—historiador y jurista— logra en estas páginas una feliz conjunción.

El volumen se cierra con cuatro apéndices: el proyecto de la ley de libertad religiosa, las enmiendas al proyecto, el informe de la ponencia de las Cortes y los textos de la ley de 28 de junio de 1967 y de la orden de 5 de abril de 1968.

Los tres estudios y los cuatro apéndices hacen de este volumen, tanto una monografía doctrinal muy sugerente, como un buen instrumento de trabajo para quien pretenda ocuparse seriamente en nuestros días de los problemas relativos al tratamiento jurídico de las cuestiones religiosas en España.

PEDRO LOMBARDÍA

Noción canónica de oficio

JOSÉ ANTONIO SOUTO, *La noción canónica de oficio*, 1 vol. de 340 págs., Ed. Universidad de Navarra, Pamplona, 1971.

En prensa este volumen, ha aparecido la obra del Prof. Souto, que constituye una importante aportación a la ciencia canónica. Ofrecemos a continuación el prólogo del Prof. Lombardía, que dará a nuestros lectores una idea cabal del libro y de su autor.

En estas páginas, escritas atendiendo a un amable ruego de José Antonio Souto, voy a referirme brevemente al autor y al libro. De este modo, además de seguir un criterio clásico en este difícil género del prólogo, me será posible destacar una idea, a mi juicio clave para comprender el alcance de esta importante monografía sobre «La noción canónica de oficio»: no estamos sólo ante un estudio interesante porque en él se analice con vigor científico un concepto clásico de la técnica canónica; esta monografía responde además a un modo de concebir la organización eclesíástica que está llamado a desempeñar un importante papel en el futuro del

Derecho de la Iglesia. A este fin es necesario aludir, no sólo al contenido de este volumen, sino también a su significado en la trayectoria que Souto ha seguido a lo largo de bastantes años de dedicación a la investigación y a la enseñanza universitaria del Derecho Canónico.

Recuerdo aquellos días de otoño de 1963 en los que José Antonio Souto y yo comenzamos una colaboración en el trabajo universitario, desde entonces nunca interrumpida. Entonces me hablaba de la importancia del estudio del Derecho Administrativo de la Iglesia y de su decidido propósito de trabajar seriamente en este sector del Derecho Canónico.

Al escucharle, yo recordaba unas interesantes sugerencias que oí al Profesor José Maldonado y Fernández del Torco durante el año académico 1954-55, en un despacho con las paredes abarrotadas de libros de su antigua casa en el madrileño barrio de Argüelles: para ser un buen canonista consideraba imprescindible el conocimiento de las construcciones de los estudiosos del Derecho secular; pero esta exigencia no podía ser atendida si el estudio del Derecho del Estado se limitaba a la tradición, siempre renovada, del Derecho Civil o a algunas reflexiones, sometidas al riesgo de ser más brillantes que profundas, de Teoría general del Derecho; para llevar a cabo una construcción del Derecho Canónico, acorde con las exigencias de la moderna Ciencia del Derecho, Maldonado consideraba imprescindible tener muy en cuenta los conceptos y esquemas del Derecho Administrativo.

Estos interesantes puntos de vista de Maldonado no encontraron en mí el necesario eco cuando daba mis primeros pasos en el campo del Derecho

Canónico. Mis preferencias se orientaban entonces hacia la consideración unitaria del ordenamiento canónico, idea central que permitiría, tanto la construcción técnica del sistema en la línea sugerida por el llorado maestro Vincenzo Del Giudice, como la sistematización de un programa de Derecho Canónico al que diera unidad un planteamiento técnico-jurídico congruente con las exigencias de unas enseñanzas que habían de desarrollarse en el marco de las Facultades españolas de Derecho. Era lógico, por tanto, que mi interés se dirigiera entonces, más que a las distintas ramas en que puede dividirse el estudio del Derecho de la Iglesia, a la unidad del sistema. Dado este planteamiento, tampoco podía sorprender que, a la hora de buscar las bases técnicas de la construcción, me sintiera atraído, más que por los esquemas y conceptos característicos de tal o cual rama del Derecho, por las cuestiones de Teoría general. Quizás por esta razón aquellos consejos de Maldonado no ejercieran en mí inicialmente todo el influjo positivo que hubiera cabido esperar.

Sin embargo el tema del Derecho Administrativo Canónico tuvo que ocupar necesariamente mi atención, sencillamente porque al colaborar en el trabajo universitario con José Antonio Souto, he tenido la envidiable oportunidad de seguir de cerca una tarea científica en ese campo, concebida y realizada con rigor ejemplar.

Es imposible, en efecto, trabajar cerca de José Antonio Souto y no interesarse por el objeto de su tarea. En seguida se descubren sus excepcionales dotes de universitario: finura intelectual, ponderación de juicio, serenidad en la reflexión crítica sobre las estructuras universitarias, capacidad de trazar amplios proyectos de investigación a largo plazo y tenacidad para llevarlos a cabo, iniciativa y generosidad en la búsqueda de una continua mejora de un servicio docente, siempre premiado con el fruto de la eficacia. Todas estas cualidades se complementan felizmente con sus limitaciones; creo poder afirmar que José Antonio Souto carece de aquellas cualidades que permiten a un universitario arrastrar con aparente normalidad una labor mediocre, puesto que es incapaz de suplir el trabajo con la improvisación y de revestir con brillantez la superficialidad. Y descubierta su calidad profesional y humana, surge espontáneamente el interés por la temática y por los resultados de su tarea científica.

Cuando sus proyectos de investigación en el campo del Derecho Administrativo de la Iglesia se concretaron de manera definitiva, contaba ya con una sólida formación: era Doctor en Derecho Canónico, Licenciado en Derecho, colaboraba con gran eficacia en las enseñanzas de la cátedra de Derecho Canónico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra y conocía muy bien el Derecho Administrativo a través de la bibliografía italiana y de la brillante producción de los administrativistas españoles del momento. Sin embargo, el rigor científico de Souto le impedía irrumpir con una serie de publicaciones al uso, en las que el riesgo de lograr más brillantez que profundidad es prácticamente inevitable. Por el contrario, dedicó muchas horas de estudio crítico de las fuentes del Derecho de la Iglesia y de la literatura canónica antigua y moderna. Fruto de esta labor fue un plan de trabajo, muy bien concebido, que hoy nos es posible reconstruir gracias a su primera publicación, que apareció en 1965¹.

Al releer ahora aquellas «Sugerencias para una visión actual del Derecho Administrativo Canónico» se comprenden las razones del éxito de la ulterior producción científica de José Antonio Souto. En aquel artículo se encontraba, por primera vez en la literatura canónica, una actitud basada en un conocimiento de la doctrina administrativista suficientemente sólido para permitir a su autor situar en una adecuada perspectiva los fundamentales interrogantes que plantea la legislación de la Iglesia sobre la materia y enjuiciar con maduro criterio las insuficiencias de los escritos canónicos que habían pretendido aportar soluciones. Pese al tono sobrio que caracteriza a sus páginas, se adivina en ellas una resuelta actitud técnica en relación con el futuro de los estudios canónicos acerca del tema, adoptada al filo de una reflexión crítica acerca de las líneas maestras de la evolución de los estudios de Derecho Administrativo.

«El carácter relativo y circunstancial de los principios inspiradores del Derecho Administrativo continental —escribía entonces José Antonio Souto— limitan considerablemente el ámbito de aplicación de las construcciones jurídicas de esta Ciencia. Los conceptos técnicos, elaborados por sus cultivadores, carecen de valor universal por razón de los presupuestos en que se apoyan y, por tanto, su aplicación a los ordenamientos jurídicos, que no han incorpo-

1. *Sugerencias para una visión actual del Derecho Administrativo Canónico*, en IUS CANONICUM, 5

(1965), pp. 111-139. Las citas que se hacen a continuación corresponden a las pp. 133-137.

rado aquellos principios, difícilmente puede conducir a resultados positivos».

En las palabras que acabo de transcribir encuentro tanto las bases para una crítica de la doctrina canónica precedente, como una nueva manera de entender el planteamiento del problema. En efecto, cuando los canonistas habían tratado de resolver cuestiones tales como la distinción entre la actividad judicial y la administrativa, la naturaleza de las atribuciones de las Congregaciones de la Curia Romana o los conflictos de competencia entre éstas y los Tribunales, se habían planteado temas técnicos, cuyo tratamiento implicaba la utilización de nociones propias de la Ciencia del Derecho Administrativo; sin embargo, esta utilización adolecía de evidentes deficiencias —aceptar como dogmáticamente establecido lo que sólo era la opinión del sector de la doctrina que les resultaba más familiar; centrar la atención exclusivamente en el Derecho estatal del propio país, olvidando la variedad de soluciones que se dan incluso en ordenamientos jurídicos que presentan innegables afinidades, etc.—, todas ellas reconducibles en definitiva a una sola: recepción indiscriminada y acrítica de determinadas aportaciones de los estudiosos del Derecho del Estado, utilizadas como piezas independientes y definitivamente conformadas, sin advertir que su sentido sólo puede comprenderse si se ven insertas en un conjunto vivo y dinámico, sometido a tales condicionamientos ideológicos, políticos y constitucionales, que obligan a descartar *a priori* cualquier posibilidad de descansar en lo universalmente aceptado y científicamente establecido.

Es cierto que la literatura canónica relativa a los problemas aludidos —me refiero a la producida entre el *Codex Iuris Canonici* y el Concilio Vaticano II— parte siempre, al menos de manera implícita, de un interrogante acerca de la aplicabilidad al Derecho de la Iglesia de las categorías surgidas en el estudio del Derecho de los Estados; pero esta reflexión previa no dispensaba de plantearse otra cuestión que la actitud científica de Souto ha revelado como más significativa: la evolución de los estudios acerca del Derecho Administrativo de los Estados ¿qué enseñanzas ofrece al que se propone, no trasplantar tal o cual noción aislada, sino sentar las bases del estudio de los problemas jurídicos que se plantean en el concreto ámbito del Derecho de la Iglesia?

La aludida cuestión ni siquiera llegó a plantearse; quizás por esta razón los frutos no pueden considerarse alentadores, puesto que la doctrina —en

tre continuas vacilaciones acerca de la adopción de los criterios orgánico, formal y material, en su esfuerzo por distinguir las potestades eclesiásticas y demostrar la existencia de una potestad administrativa en la Iglesia— no conseguía dar pasos adelante, al encontrar el camino cerrado por el dato de la ausencia de división de poderes: «Pretender fundamentar el Derecho Administrativo Canónico sobre estos principios —advertía con razón Souto— era tarea, si no imposible, al menos francamente difícil. La Iglesia, es bien sabido, permaneció ajena a las influencias de la Revolución francesa, y conservó su estructura orgánica tradicional, cimentada en la concentración de poderes en la persona del Romano Pontífice con carácter universal y en la de los Obispos a nivel diocesano. Por esta razón se comprende que los intentos realizados en este sentido no hayan obtenido resultados positivos y que las posiciones irreductibles, que al respecto se han adoptado, hayan contribuido a deprecia el interés del tema y, en cierto modo, a cerrar el camino a ulteriores investigaciones».

José Antonio Souto, en cambio, viendo la cuestión desde la perspectiva que ofrece advertir «el carácter relativo y circunstancial de los principios inspiradores del Derecho administrativo continental», podía ver con más optimismo el porvenir: «En la actualidad, sin embargo, la apertura de horizontes que ofrece la Ciencia del Derecho Administrativo, estimula a replantear el tema y a sugerir una nueva orientación en el tratamiento de estos estudios».

La «nueva orientación» se basa en un conjunto de presupuestos críticos. En primer lugar, supone estar convencido que no importa tanto la división de poderes, como darse cuenta del papel histórico que desempeñó esta idea en el descubrimiento de la distinción de funciones y en la individuación científica de la actividad administrativa, de suerte que fuera posible «delinear con precisión la figura de la Administración pública, desde el ángulo de la Ciencia de la Organización».

A partir de aquí, es necesario trascender una idea de Administración concebida como el «conjunto de limitaciones jurídicas en que se trata de circunscribir su actividad», para verla más bien como «un complejo de hechos y relaciones de diversa naturaleza, que exorbitan, en gran medida, el objeto propio del Derecho». Quedaban así claramente insinuadas, tanto la distinción como las evidentes relaciones entre la Ciencia de la Administración y un Derecho Administrativo entendido

«simplemente como el Derecho de la Administración». No se trata, por tanto, de preguntarse como punto de partida si en la Iglesia se da una división de poderes, sino sencillamente de tener en cuenta el dato de que existe una Administración eclesiástica, puesto que «donde exista administración, se dará obviamente un Derecho Administrativo, que estudiará precisamente las relaciones jurídicas en las que aquella intervenga».

Establecidos estos presupuestos, Souto escribió unas palabras que han resultado precursoras de las actitudes más vigorosas de la canonística, en estos días en que está tan viva la polémica sobre el proyecto de Ley fundamental de la Iglesia: «De este modo, los principios de legalidad, control jurisdiccional y el tan citado de la individuación orgánica del poder administrativo, no serán, pues, supuestos condicionantes de la existencia del Derecho Administrativo, sino que, en la medida en que sean aplicables y habida cuenta de las peculiaridades propias de cada ordenamiento, supondrán un mayor grado de perfeccionamiento del sistema jurídico aplicado».

El autor se situaba así en un camino, de cuya «validez universal» no cabía dudar y que, con respecto al Derecho Canónico, permitía «salir de los angostos límites de la polémica entablada y orientar la investigación por nuevos derroteros».

Para recorrer este camino era necesario emprender un estudio de la organización eclesiástica que «pondrá de relieve la naturaleza de las atribuciones y competencias de la estructura orgánica y simplificará el problema de la individuación de la actividad administrativa de la Iglesia». La parte de más denso contenido metodológico del primer artículo de Souto terminaba con unas palabras llenas de sereno optimismo: «La investigación de las instituciones canónicas encuadrables dentro de los criterios señalados, contribuirá eficazmente al desarrollo de esta rama jurídica y a prestar considerables aportaciones a la Ciencia del Derecho Administrativo Comparado, como ha sucedido en épocas no lejanas a nosotros».

Me he detenido en reseñar las fundamentales ideas de este primer artículo de José Antonio Souto, porque a mi juicio, nos da la clave, tanto de sus ambiciones iniciales, como de la trayectoria de una tarea intelectual, dentro de la cual cobra todo su sentido el libro que el lector tiene entre las manos. Se pretendía marginar las vacilaciones de una doctrina, perdida entre las «peculiaridades» (digamos, más claramente, *deficiencias*) de la legislación

canónica y aherrojada por los retazos de Derecho administrativo secular que le era dado manejar con inevitable tosquedad, para pasar a construir un Derecho Administrativo Canónico de nuevo cuño que, prescindiendo de actitudes defensivas, se apresuraría a cumplir un papel, no sólo útil cara a los problemas jurídicos de la Iglesia, sino verdaderamente significativo en el campo del Derecho Administrativo Comparado. El programa incluía, como pasos fundamentales, la individuación de la organización eclesiástica, el estudio de las normas que la rigen y el establecimiento de los criterios que pudieran conducir a superar sus deficiencias.

No sé si José Antonio Souto esperaba que este escrito tuviera consecuencias espectaculares, hasta el extremo de provocar numerosos estudios inspirados en los criterios por él propuestos. Sospecho que no sería esa su actitud, porque el modo en que fueron presentadas sus «Sugerencias» —las páginas de una reseña— no era el más adecuado para desencadenar tales efectos. Probablemente intuiría la gran verdad que da sentido a este tipo de escritos. Cuando un estudioso propone unos nuevos criterios de método, la mayoría de las veces sólo consigue inicialmente un resultado: emplazarse a sí mismo. No sé si sería consciente de ello; no cabe duda, sin embargo, de que su trayectoria posterior ha confirmado su lealtad a este compromiso intelectual.

En realidad, el momento en que José Antonio Souto publicó este artículo no era el más propicio para atraer la atención de la doctrina sobre sus propuestas. No se olvide que aquel mismo año tuvo lugar la clausura del Concilio Ecuménico Vaticano II. Aun prescindiendo de las clamorosas manifestaciones de superficial antijuridismo, no puede olvidarse que en aquellos días buena parte de los estudiosos estaban más sensibilizados para interesarse por los grandes problemas de fundamentación —por la consideración del Derecho Canónico al filo de la reflexión acerca del Misterio de la Iglesia, por las consecuencias de la doctrina conciliar sobre el diálogo Iglesia-Mundo o por la dimensión jurídica de las nuevas directrices en materia de ecumenismo—, que por un planteamiento del Derecho Administrativo de la Iglesia expuesto en términos tan rigurosamente técnicos, sin la menor concesión a las actitudes y a la terminología entonces en boga. Sin embargo, no haría falta esperar mucho tiempo para que pudiera comprobarse la oportunidad con que Souto trazó aquel proyecto de trabajo. En efecto, sin rectificar un ápice la línea

que había señalado al redactar sus «Sugerencias», habría de ser uno de los canonistas que captaran con mayor finura los problemas jurídicos de fondo planteados por el Concilio Vaticano II y que dedicaran más atención al estudio de algunos de sus documentos.

La primera ocasión en que este hecho tendría una manifestación no exenta de solemnidad académica se presentó el 5 de septiembre de 1967. Aquel día nos reuníamos en la Universidad de Navarra cinco catedráticos de Derecho Canónico para juzgar una tesis doctoral. José Antonio Souto optaba en aquel acto al título de Doctor en Derecho con una memoria sobre el tema «Estructura Constitucional de la Iglesia particular». La sesión no fue precisamente de trámite, no sólo por el hecho tan poco frecuente de que el Tribunal estuviera integrado en su totalidad por especialistas en la materia, sino también porque en ella tuvo lugar una interesantísima discusión que se prolongó durante varias horas. Era lógico que así ocurriera puesto que el Tribunal tuvo que juzgar en aquella ocasión quizás la primera monografía canónica de notable entidad y amplitud, centrada en el estudio de los textos del Vaticano II —la asamblea considerada entonces por muchos, sobre la base de una contraposición que con un mínimo de sentido crítico sólo puede ser acogida con muchas reservas, más pastoral que jurídica²—, llena de citas de estudiosos de la Ecclesiología más rigurosamente renovadora, que trataba de aportar una contribución al estudio de uno de los temas que habían experimentado mayores enriquecimientos como consecuencia del Magisterio del Sínodo Ecu­menico. No se trataba, por otra parte, de un diálogo en el que el empleo de una terminología de moda o la referencia táctica a las preocupaciones del momento asegurara un fácil éxito coyuntural, puesto que en el Tribunal estaba presente, por medio de algunos de sus más autorizados representantes, la orientación canónica más exquisitamente técnico-jurídica, que había recuperado para el estudio del Derecho de la Iglesia, en los años anteriores al Con-

cilio, un puesto honroso en el panorama general de la Ciencia del Derecho, presagiando una vuelta a los gloriosos tiempos del *Ius Commune*, en los que las Decretales de los Papas y los escritos de los canonistas habían sido el motor de una renovación del Derecho de la Europa cristiana. La discusión de la tesis tuvo gran interés, puesto que en ella había que plantearse, con el rigor propio del estilo universitario, las arduas cuestiones de método que inevitablemente se presentan al canonista del postconcilio. José Antonio Souto superó con su habitual seriedad científica aquella prueba y obtuvo entonces su segundo título de doctor con la máxima calificación.

¿Qué significaba este paso de los planteamientos más estrictamente técnico-jurídicos al estudio de uno de los temas más estrechamente relacionados con la Ecclesiología conciliar? Algo a mi juicio muy sencillo.

Souto, fiel a la línea que se había propuesto, comenzaba el trabajo dirigido a individuar la Administración eclesiástica mediante un estudio integral de la Organización, teniendo en cuenta las características peculiares del sistema jurídico analizado. A este fin era importante elegir un sector de la estructura jurídica que fuera verdaderamente significativo del espíritu del Derecho de la Iglesia. Pocos podían serlo tanto como el de la Iglesia particular, al que el Vaticano II había aportado tan importantes enriquecimientos.

Además era preciso acercarse a la Administración a partir de una visión completa de la Organización, con lo que la dimensión constitucional había de aparecer en primer plano; es lógico, por tanto, que de este planteamiento surgiera una aportación verdaderamente significativa al estudio constitucional de la Iglesia local, recogida parcialmente en cuatro trabajos, fundamentales en la materia³.

Quedaba así demostrada la validez del plan de trabajo propuesto por José Antonio Souto para llevar a cabo el estudio de los grandes temas que el Concilio Vaticano II presenta al canonista. Ello significa, en definitiva, que un planteamiento técnico-

2. Uno de los más finos observadores de la evolución del Derecho Canónico y de la canonística española había llamado ya la atención acerca de la inexactitud de las opiniones que consideraban escasa la dimensión jurídica del Concilio. Cfr.: J. LÓPEZ ORTIZ, *Valoraciones y decisiones jurídicas en el Concilio Vaticano II*, en IUS CANONICUM, 6 (1966), pp. 5-24.

3. Desde este punto de vista son fundamentales los siguientes: *Aspectos jurídicos de la función pastoral del Obispo diocesano*, en IUS CANONICUM, 7 (1967), pp. 119-148; *La potestad del Obispo diocesano*, ibid., 7 (1967), pp. 365-450; *Estructura jurídica de la Iglesia particular*, ibid., 8 (1968), pp. 121-202; *Chiese particolari e Chiesa universale*, en "Studi Cattolici", 113-114 (agosto-septiembre 1970), pp. 550-555.

jurídico, si está concebido con verdadero rigor, lejos de apartar la atención de los problemas más profundos de la estructura de la Iglesia —es decir, los que inciden más en el núcleo de lo que nos es dado entrever del Misterio—, resulta absolutamente imprescindible para deducir algunas de las más interesantes consecuencias del Magisterio conciliar. Lo que esta comprobación significa en el momento actual de los estudios canónicos no parece necesario subrayarlo.

Podía, sin embargo, quedar la duda de si esta proyección, a partir de un planteamiento técnico-jurídico, hacia las grandes cuestiones relativas a la Constitución de la Iglesia, no podría restar al quehacer del canonistas utilidad práctica, en un momento en que es necesario resolver tantas cuestiones concretas relativas a muchas facetas de las estructuras eclesiológicas, afrontar problemas inéditos de formalización legislativa e interpretar, con seguridad exegética y con la mente abierta a las reales necesidades del Pueblo de Dios, las nuevas normas jurídicas de la Iglesia. Sin embargo, también desde este punto de vista, el método propuesto por José Antonio ha demostrado ya con creces su fecundidad.

leyendo sus trabajos y comparándolos con el resto de la bibliografía se comprueba que la visión amplia imprescindible para establecer la conexión entre los aspectos más concretos de la Administración eclesiológica y las más profundas raíces de la Organización de la Iglesia, no es un obstáculo para obtener frutos tangibles en el trabajo técnico-jurídico, especialmente en aquellos puntos que han sido objeto de reformas por parte del Vaticano II o de la legislación pontificia posterior. En sus estudios descubrimos al jurista que, eludiendo siempre la retórica del momento y el ingenuo entusiasmo por las novedades, se plantea los problemas concretos más actuales de la vida de la Iglesia y que enjuicia el realismo de las soluciones; al crítico al mismo tiempo respetuoso e implacable de las normas o de los proyectos de este Derecho Canónico de hoy, víctima de los defectos de una activi-

dad legislativa inevitablemente apresurada. Baste recordar al respecto sus trabajos sobre los cooperadores del Obispo diocesano⁴ sobre la Constitución Apostólica «Regimini Ecclesiae Universae»⁵, sobre el reglamento de la Signatura Apostólica⁶ o sus contribuciones al estudio crítico del proyecto de Ley fundamental⁷.

La breve reseña que acabamos de hacer de una parte de la producción canónica de Souto nos ha puesto de relieve que los criterios expuestos en sus «Sugerencias para una visión actual del Derecho Administrativo Canónico» han demostrado su eficacia en el éxito con que han sido aplicados al estudio de una amplia gama de temas monográficos, unos relacionados con los principios fundamentales de la Constitución de la Iglesia, otros relativos a la exégesis de normas o a aspectos muy concretos de la Organización. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que estos estudios monográficos son otras tantas piezas de un mosaico que, una vez terminado, podrá ofrecernos una visión de la Organización eclesiológica, considerada en su conjunto.

¿En qué consiste esta nueva visión de la Organización eclesiológica? Confío en que en un plazo no muy largo José Antonio Souto pueda ofrecerla de manera completa y sistemática en una obra de carácter general; pero hoy ya tenemos elementos de criterio suficientes para hacernos cargo del alcance de su aportación. Estos elementos de criterio se pueden agrupar en dos apartados: los estudios sobre teoría de la Organización y su labor docente e impulsora de trabajo científico en este importante sector del Derecho Canónico.

En realidad, buena parte de la producción de Souto está llena de aportaciones a la teoría de la Organización eclesiológica. Desde las «Sugerencias» que escribiera en 1965, pasando por cuantos trabajos hemos aludido en estas páginas, sus escritos están llenos de elementos doctrinales, que en su conjunto implican toda una visión de conjunto de la Organización. Sin embargo, es en tres artículos, a los que aún no he aludido, donde se encuentran las aportaciones que constituyen, a mi juicio, la

4. Los cooperadores del Obispo diocesano, en «La función pastoral de los Obispos» (Salamanca 1967), pp. 241-276.

5. La reforma de la Curia Romana, en IUS CANONICUM, 8 (1968), pp. 547-568.

6. El reglamento del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, en IUS CANONICUM, 9 (1969), pp. 521-538.

7. Jerarquía personal y organización, De Ecclesiae Muneribus y Sugerencias para la revisión del proyecto (este último en colaboración con J. Hervada y con el autor de estas líneas), en «El proyecto de Ley Fundamental de la Iglesia» (Pamplona 1971), pp. 160-164, 180-190 y 216-226.

clave de su planteamiento: «El *munus regendi* como función y como poder», «Consideración unitaria de la organización eclesiástica» y «El gobierno central de la Iglesia».

Si pretendiéramos sintetizar brevemente cuáles son las dificultades que ha encontrado la doctrina para construir una teoría unitaria y coherente de la Organización eclesiástica, podríamos formularlas así: a) Algunas funciones eclesiales que juegan un importantísimo papel en la Constitución divina de la Iglesia se fundamentan en la participación ministerial en el Sacerdocio de Cristo, con la consiguiente consecuencia de que sean transmitidas sacramentalmente, lo cual parece llevar a una concepción eminentemente personal del gobierno de la Iglesia. b) Esta concepción personalista, impediría a su vez delimitar en la Iglesia unas funciones en sentido jurídico, puesto que lo decisivo no serían las funciones, sino las personas sacramentalmente destinadas a desempeñarlas. c) La Organización eclesiástica no podría ser, en definitiva otra cosa, que un conjunto de oficios —concebidos personal o institucionalmente—, muchos de ellos con funciones transmitidas a sus titulares mediante el Sacramento del Orden, siendo tarea vana intentar concebirla en una consideración jurídicamente unitaria. d) Al estar concentrados los fundamentales poderes en el Papa y en los Obispos y al no existir ningún límite externo al ejercicio del poder en la Iglesia, puesto que es transmitido directamente por Cristo al Papa y a los Obispos, las garantías de los derechos de los fieles difícilmente podrían estar protegidas mediante un régimen jurídico del ejercicio del poder; en definitiva, las únicas garantías verdaderamente válidas habría que ponerlas en los carismas con que el Espíritu Santo asiste a los que gobiernan, los cuales —en caso de no ser fieles a ellos— podrían gobernar arbitrariamente, sin que quedara a los perjudicados más solución que la esperanza en la justicia escatológica, esperanza no pequeña ciertamente, pero que nada tiene que ver con el Derecho.

Pues bien, en el núcleo mismo de estos problemas —formulados, como es obvio, con mucho más rigor técnico que en la sintética descripción que de ellos acabamos de hacer— se mueven las aportaciones que José Antonio Souto lleva a cabo en

los tres fundamentales estudios a que acabo de referirme.

En su breve y densa comunicación al «Conventus Internationalis Canonistarum», celebrado en Roma durante el mes de mayo de 1967 por iniciativa de la Comisión Pontificia para la revisión del Código de Derecho Canónico, se plantea el tema del significado de la expresión *munus regendi* en los documentos del Concilio Vaticano II y se pregunta si del hecho de que este *munus* sea transmitido sacramentalmente ha de deducirse que, ya desde esta transmisión, contiene la potestad de jurisdicción. Tras un fino análisis de los textos, en el que se adivina siempre a un jurista cuyo rigor técnico no le impide tener una fina sensibilidad eclesiológica, distingue con nitidez el significado de los términos «función» y «potestad» para establecer unos criterios que permitan separar conceptualmente lo que constituye el estatuto básico de los obispos y de los presbíteros, fundamentado en los *munera* transmitidos sacramentalmente, de las funciones orgánicas que constituyen las atribuciones de los oficios eclesiásticos, las cuales sólo en algunos casos se ejercen con *potestas*. Sobre esta base le es posible establecer el carácter originario de la *potestas* del Oficio del Romano Pontífice, del Colegio episcopal y del oficio de obispo diocesano, mostrando a su vez la conexión entre esta *potestas* —relacionada con los oficios (sólo puede hablarse de *potestas* cuando hay determinación de los sujetos sobre los que ha de ejercerse)— y los *munera* transmitidos sacramentalmente, que han de concebirse como requisitos de idoneidad de las personas físicas llamadas a desempeñar los oficios. La conclusión de todo ello es «que la descripción de la actividad jurídica de la organización eclesiástica no se puede hacer partiendo de los *munera*, sino de la *potestas iurisdictionis* del oficio, única actividad creadora de derecho, desde el punto de vista de la organización y que se manifiesta en la triple vertiente: legislativa, judicial y administrativa»⁸.

Continuando el esfuerzo de construcción, José Antonio Souto se plantearía en otro trabajo⁹, con gran claridad, las dos grandes cuestiones que es necesario dilucidar para llegar a conclusiones claras de la organización de la Iglesia: la relación

8. El «*munus regendi*» como función y como poder, en «Acta Conventus Internationalis Canonistarum» (Romae, 1970), pp. 239-247. (La cita literal corresponde a la p. 247). Vid. también, J. A. Souto, *La collegialità*

dopo il Vaticano II, en «Studi Cattolici», 100/101 (julio-agosto 1969), pp. 518-525.

9. Consideración unitaria de la organización eclesiástica, en IUS CANONICUM, 9 (1969), pp. 157-178.

persona-oficio y el lugar del oficio en la organización.

Con respecto al primero de los temas apuntados, Souto vuelve, una vez más, a encontrar una vía de solución para una «vexata quaestio», no por el camino de reforzar la argumentación de una de las posiciones tradicionalmente enfrentadas, sino superando radicalmente el planteamiento. La solución aparece cuando el problema se pone en relación con la segunda de las cuestiones planteadas. No se trata, en definitiva, de aceptar que la transmisión por vía sacramental de determinadas funciones eclesiásticas obligue a una concepción personalista del oficio, que lleve inevitablemente a una visión atomizada de la organización; «el problema reside —explica Souto— en una correcta comprensión de lo que podríamos denominar bases sacramentales de la comunidad eclesiástica»¹⁰. En esta aclaración hay un interesante paso desde la consideración de las bases sacramentales de cada oficio a un planteamiento en el que se tiene también en cuenta la dimensión sacramental de la Iglesia considerada en su conjunto. Gracias a él, un problema fundamental para el Derecho Canónico, en el que hasta ahora parecía que los datos eclesiológicos estaban en tensión con respecto a las soluciones que parecían preferibles desde un punto de vista técnico-jurídico, encuentra una solución armónica, en la que la promoción del orden social justo se ve impulsada por las conclusiones a que llega un jurista, reflexionando en lo que el Concilio Vaticano II nos enseña acerca del Misterio de la Iglesia.

En efecto, a partir de esta vigorosa intuición, sobre la base de la doctrina de la Iglesia-sacramento, le será posible plantear una visión unitaria de la organización, abierta a la diversidad de matices que la Constitución de la Iglesia exige —variedad en la naturaleza de las funciones, autonomía (dentro de una relación jerárquica) de la organización local con respecto a la universal—, jurídicamente fecundísima, puesto que, una vez individualizada unitariamente la organización en su consideración estática, cabe resolver con mayor precisión, en una perspectiva dinámica, las cuestiones más vivas que hoy plantea al canonista la potestad eclesiástica: sus límites, la posibilidad de que su ejercicio sea sometido a una regulación jurídica, en una palabra,

el régimen jurídico de la organización eclesiástica al Derecho y las garantías que en relación con su actividad puede y debe tener la libertad de los fieles.

En una ponencia desarrollada en el Simposio organizado por el Instituto «Martín de Azpilcueta» de la Universidad de Navarra sobre «El gobierno central de la Iglesia»¹¹, José Antonio Souto llevó a cabo nuevas aportaciones, de gran interés para una comprensión actual de la Organización eclesiástica, que significan un paso adelante más en su labor de canonista. En este trabajo, algunas de las ideas que había intuido en 1965, al redactar sus «Sugerencias para una visión actual del Derecho Administrativo Canónico», alcanzan un completo desarrollo. Leyendo sus páginas se comprueba como una labor profunda en este sector del Derecho de la Iglesia no solamente tiene eficacia en el campo de los estudios canónicos, sino que lleva también a conclusiones de alcance general, utilísimas para la única Ciencia del Derecho.

Tras un fino análisis de la noción, contenido y técnicas de ejercicio de la función de gobierno, Souto se ocupa en este trabajo de los sistemas de Organización, estudiando en primer lugar el sistema de división de poderes, para poner de relieve que «no es una división que nazca de la propia naturaleza de la función de gobierno, sino una solución práctica, un problema de garantías que en un proceso lógico es un *posterius*, ya que tiene lugar en el momento de atribución de competencias a los órganos». «Por ello —concluye a continuación—, desde un punto de vista organizativo, opinamos que la división de poderes carece de justificación...»¹².

Esta afirmación no le impide, sin embargo, admitir el hecho de que históricamente —al menos en el Derecho continental europeo— ha sido la doctrina de la división de poderes la que ha alentado un concreto sistema de organización que ha dado lugar a unas técnicas —el principio de legalidad y la jerarquía de normas, el procedimiento administrativo y el control jurisdiccional, etc.— de evidente significación en el campo del Derecho, «porque pretenden encuadrar la función de gobierno en un orden justo, donde el súbdito encuentre la necesaria protección jurídica»¹³.

Al analizar el concreto problema del Derecho Canónico, Souto advierte la evidente limitación del sistema jurídico en lo que se refiere a las técnicas

10. Ibid., p. 169.

11. *La función de gobierno*, en IUS CANONICUM, 11, n.º 22 (julio-diciembre 1971), pp. 180-215.

12. Ibid., p. 191.

13. Ibid., p. 194.

de organización. No le parece, sin embargo, que la causa de estas insuficiencias radique en los principios de la Constitución de la Iglesia, que impiden acoger la división de poderes, o en las dificultades con que el canonistas se encuentra para identificar con precisión a los órganos administrativos. Recuerda, al respecto, que la falta de división de poderes no ha constituido un obstáculo para la existencia de un Derecho procesal canónico, para que la Constitución «Regimini Ecclesiae Universae» haya implantado el principio de control jurisdiccional de la actividad de los dicasterios de la Curia Romana o para que los principios directivos para la revisión del Codex y la más reciente doctrina apunten hacia una aplicación al Derecho de la Iglesia de los principios de legitimidad y de la jerarquía de fuentes. «Por ello, alegar que la ausencia de este sistema (la división de poderes) es la causa de la situación precaria del Derecho Administrativo Canónico no deja de ser un sofisma. La causa real es la ausencia en el ordenamiento canónico de las técnicas jurídico-administrativas que han sido elaboradas por el Derecho Administrativo»¹⁴.

Continuando su reflexión, José Antonio Souto se esfuerza en llegar al fondo del problema. No se trata de considerar que la ausencia en el sistema canónico de un Derecho Administrativo de corte continental sea un mal grave, puesto que son posibles otros modos de concebir jurídicamente la función de gobierno: «Lo que sí me parece más grave —escribe— es que no exista una Ciencia jurídica de gobierno eclesiástico o, más concretamente, que la legislación canónica haya ignorado, en gran parte, la regulación jurídica de la función de gobierno»¹⁵. Este aserto encuentra su justificación en el hecho de que las normas canónicas relativas al gobierno eclesiástico se sitúan casi siempre en un plano organizativo «con olvido total de las garantías jurídicas de los destinatarios de esa función»¹⁶. Para Souto, en efecto, el Derecho Canónico olvida prácticamente por completo la relación entre órganos de gobierno y destinatarios, lo cual significa renunciar al aspecto jurídico más importante de la cuestión: «Si el estudio de la función de gobierno, desde un punto de vista jurídico, puede tener interés en sí mismo, no cobra, sin embargo, el momento álgido de su atractividad mientras no

se sitúa en su dimensión relacional y justa y se delimita la protección jurídica de los destinatarios ante la posible desviación o abuso del poder. Y ello, porque lo que interesa jurídicamente de la función de gobierno es —como en cualquier otra manifestación social— el *iustum*: la justificación, no la eficacia»¹⁷.

Parece imprescindible, por tanto, plantearse seriamente el problema jurídico del gobierno eclesiástico para encontrar fórmulas que faciliten una eficaz aplicación de las técnicas jurídicas que garanticen los derechos de los fieles, de manera congruente con la Constitución de la Iglesia. José Antonio Souto¹⁸ considera que puede arbitrase un sistema de técnicas y procedimientos que respetando la concepción unitaria del poder —también desde un punto de vista subjetivo— garantice una acción de gobierno justa y, por tanto, brinde la adecuada protección jurídica a los súbditos; a saber, el sistema de concentración, matizado por los principios de distribución orgánica de funciones por áreas materiales de actividades y de jerarquía orgánica y por la aplicación de técnicas publicísticas, tales como la jerarquía de normas, el principio de legalidad, un procedimiento establecido normativamente para regular la actividad de los órganos, etc.; en relación con este procedimiento Souto destaca la importancia de «la intervención de órganos que —sin pertenecer a la organización gubernativa— informen y asesoren a los órganos de gobierno». «Este sistema —añade— adquiere su máxima garantía cuando junto al *staff* existe una organización de control de la función de gobierno»¹⁹.

No es posible detenernos a reseñar la aplicación de estos principios al ejercicio de la función de gobierno en la Iglesia, especialmente en lo que se refiere al gobierno central, tema del Simposio en el que fue expuesto este trabajo, probablemente el más importante de los publicados hasta ahora por José Antonio Souto. Lo que me parece imprescindible destacar es que en este estudio se cierra, en sus líneas fundamentales, el ciclo abierto en 1965 con la publicación de las «Sugerencias». Ya no se trata de un proyecto de trabajo, sino de un conjunto de aportaciones, fruto de la labor de un canonista de gran calidad y madurez²⁰ que, lejos de limitarse a tratar de trasplantar al Derecho Canónico

14. Ibid., p. 192.

15. Ibid.

16. Ibid., p. 193.

17. Ibid.

18. Cfr.: Ibid., pp. 196-197.

19. Ibid., p. 200.

20. Cfr., además de los estudios citados: J. A. Souto, *La disolubilidad del matrimonio consumado* (dos-

determinadas técnicas del Derecho Administrativo de los Estados, ha reflexionado con profundidad sobre la función de gobierno en general y sobre los concretos problemas del gobierno de la Iglesia, contribuyendo a facilitar una dilatación de horizontes en el tratamiento de los grandes temas del Derecho Público.

Sin embargo, para presentar la personalidad universitaria de José Antonio Suoto no basta aludir a sus trabajos; es necesario hacer referencia también a su labor docente. Después de colaborar durante varios años en la Cátedra de Derecho Canónico de la Facultad de Derecho de Pamplona, de haber desarrollado cursos sistemáticos de Derecho Concordatario y de Derecho Patrimonial Eclesiástico y de haber prestado una eficaz ayuda en la docencia del Derecho Procesal Canónico, Souto iniciaría la enseñanza de la disciplina que con su labor científica había contribuido de manera tan decisiva a forjar.

En 1967 la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra comenzó a poner en práctica un nuevo plan de estudios, basado en la aplicación de la distinción en ramas al estudio del Derecho de la Iglesia. En este plan de estudios se integra una asignatura, denominada «Organización Eclesiástica», cuyas enseñanzas fueron confiadas a José Antonio Souto desde el primer momento; es decir, desde el comienzo del año académico 1967-68. En el ejercicio de esta tarea Souto viene desarrollando unos interesantes cursos sistemáticos cuyo contenido constituye el resultado más concreto y tangible del programa de trabajo propuesto en su primera publicación.

Como todas las tareas universitarias verdaderamente fecundas, su labor en este campo dejó enseguida de ser exclusivamente individual para transformarse en una labor de equipo. Algunos de sus mejores alumnos pasaron a ser sus discípulos y comenzaron a contribuir con su labor personal al estudio de diversos temas monográficos. Algunas tesis doctorales, cuyos autores han superado ya la más importante prueba académica, dan testimonio de la eficacia del trabajo realizado. Otras tesis, aun en fase de elaboración, hacen concebir esperanzas

de interesantes resultados. No es posible detenerse a describir con más detalle la labor de tan prometedor grupo de investigación canónica. Me limitaré a aludir a la que ha llevado a cabo el primero y más destacado discípulo de Souto, el Dr. Gregorio Delgado del Río, que junto a algunos estudios menores y otros trabajos aun en fase de elaboración, ha publicado una importante monografía sobre «Desconcentración orgánica y potestad vicaria» (Pamplona 1971), verdaderamente representativa de las posibilidades del método propuesto por José Antonio Souto, cuando un canonista con talento y capacidad de trabajo es capaz de conjugar un buen conocimiento de las fuentes y de la tradición canónica con una visión renovadora de la Organización eclesiástica.

* * *

He tratado de describir a grandes rasgos la trayectoria intelectual y las fundamentales aportaciones científicas del autor de esta monografía. Ahora, siguiendo el plan propuesto al comienzo de este prólogo, hemos de fiar la atención sobre el libro.

En él se estudia «La noción canónica de oficio», uno de los temas más clásicos, más importantes y más difíciles del Derecho Canónico de siempre. Bastantes canonistas de merecido renombre han dedicado al oficio algunos de sus mejores estudios que, al tratar de resolver los intrincados problemas que este instituto canónico plantea, han enriquecido el panorama de las teorías en liza, haciendo del tema una característica *quaestio disputata*.

Dada su trayectoria doctrinal era inevitable que José Antonio Souto se enfrentara con la gran cuestión del oficio eclesiástico²¹. En realidad, el oficio constituye la única pieza con un mínimo de consistencia que ha manejado hasta ahora la doctrina canónica, en orden a la elaboración desde un punto de vista técnico-jurídico, de una visión general de la organización oficial de la Iglesia. Era lógico, por tanto, que un canonista que se esfuerza en construir una visión unitaria de la Organización Eclesiástica, tomara posición ante este clásico tema, para confrontar sus puntos de vista con la doctrina anterior y para indicar el lugar del oficio eclesiás-

sier) en IUS CANONICUM, 21 (1971), pp. 109-196; *Observaciones al Motu proprio "Causas matrimoniales"* (inédito).

21. El autor se había ocupado ya del tema en algunos de sus trabajos antes citados. Vid. también: *Presupuestos doctrinales de la definición de oficio en el*

Código de Derecho Canónico, en IUS CANONICUM, 9 (1969), pp. 331-350; *Consideraciones en torno a la evolución del concepto de oficio en Derecho Canónico*, en "Actas del II Simposio de Historia de la Administración Pública" (en prensa).

tico dentro del cuadro doctrinal que viene construyendo.

La doctrina canónica anterior —Souto la describe con elegante precisión en el Capítulo II de esta monografía—, pese a la variedad de las formulaciones propuestas por los autores, puede sistematizarse en dos posiciones fundamentales: una preferentemente institucionalista, otra en la que predomina el matiz personalista; para la primera, el oficio es un «ens iuridicum», una esfera de derechos y deberes (de responsabilidades y competencias) que actúa el titular del oficio; para la segunda, el oficio sólo existe en la persona del titular, en quien radican los derechos y deberes.

Ya hemos aludido anteriormente a las posiciones tomadas por Souto en relación con los presupuestos del problema que afectan a la peculiar Constitución de la Iglesia y a la conexión, por él establecida, entre la doctrina de la Iglesia-sacramento y la consideración unitaria de la organización eclesiástica. Esta visión habría de llevarle a superar el tratamiento habitual del problema. La cuestión del oficio venía siendo en la doctrina canónica una gran cuestión enmarcada en planteamientos un tanto angostos. Este libro convierte al tema del oficio eclesiástico en una pieza, importante sí, pero sistemáticamente secundaria, en el contexto de una visión de la Organización Eclesiástica verdaderamente amplia.

No parece necesario ni oportuno tratar de resumir el contenido de esta monografía puesto que, aun en el caso de que el resumen fuera exacto, nunca supliría lo que de verdad tiene interés: la lectura detenida de sus páginas. Baste decir que el autor, tras estudiar el significado del término, las definiciones del Codex y del Concilio Vaticano II, las diferentes posiciones que ante el tema han adoptado los canonistas, los problemas doctrinales del oficio y sus relaciones con otras figuras afines, sitúa este instituto en la teoría de la organización eclesiástica, concibiéndose como una técnica organizativa, análoga a otras, también de gran tradición canónica, como la delegación, la avocación, la suplencia y el supuesto del c. 209.

En concreto, Souto concibe al oficio como una «legitimación abstracta para el ejercicio de funciones públicas eclesiásticas, constituidas de forma estable por el derecho y delimitadas de acuerdo con diversos criterios técnicos —funcional, territorial, etcétera—, cuya titularidad subjetiva corresponde a la Iglesia institución». Noción, llena de originalidad, que coloca al oficio en un plano técnico, instrumental, y centra la atención en algo mucho más im-

portante: La Iglesia-institución entendida como el titular de las funciones públicas eclesiásticas.

A la luz de este planteamiento aparece con gran claridad lo que, según la interpretación de Souto, ha sido y es el oficio eclesiástico, sus analogías y diferencias con el oficio secular —me parece de gran interés, al respecto, la visión que se ofrece en el Capítulo VI de este libro— en las épocas históricas en que el poder temporal respondía a una concepción eminentemente personal y las posibilidades que ofrece este instituto, en la actual coyuntura de la evolución del Derecho Canónico, como técnica al servicio de una institucionalización del ejercicio del poder en la Iglesia.

De esta investigación se deduce también, con no menor claridad, lo que no es el oficio eclesiástico, ni las restantes técnicas organizativas hasta ahora utilizadas en el Derecho Canónico; a saber, un sistema completo y coherente para un régimen jurídico del ejercicio del poder eclesiástico, dotado de la precisión necesaria para que puedan garantizarse con eficacia los derechos de los fieles. Mostrar este vacío me parece una importante aportación de este libro y de los anteriores estudios de José Antonio Souto acerca de la Organización eclesiástica. Llamar la atención sobre estas limitaciones del Derecho Canónico hubiera sido una aportación verdaderamente estimable. El autor de esta monografía ha hecho mucho más: sentar las bases doctrinales para superarlas; por ello su aportación al estudio del ordenamiento jurídico de la Iglesia debe considerarse fundamental.

Pamplona, 30 de noviembre de 1971.

PEDRO LOMBARDÍA

Matrimonio

JOSÉ MARÍA LÓPEZ NIÑO, *Los sistemas matrimoniales en el Derecho Concordatario*, 1 vol. de XV+231 págs., Ed. Caja de Ahorros y Monte de Piedad, Madrid, 1971.

El trabajo de José M.^a López Niño, editado por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid,